



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ACUERDO NUMERO SH/CT/R/002/2024  
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA GUBERNAMENTAL CON FOLIO  
NÚMERO 070121324000204.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chiapas, correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, dentro de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 070121324000204.

RESULTANDOS

I.- La Unidad de Transparencia tuvo por recibida la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 070121324000204, en la que textualmente solicitaron:

*"solicito los formatos de auditoría de orden de visita domiciliaria en materia de impuestos federales, de la secretaria de finanzas o similares." (Sic)*

II.- La Unidad de Transparencia, una vez analizada la naturaleza y contenido de la petición, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, estimó procedente turnar a la Subsecretaría de Ingresos, el requerimiento de información respectivo, con el objeto de que en el ámbito de su estricta competencia atendiera la solicitud de información.

III.- Recibido el requerimiento de la Unidad de Transparencia, el titular de la Subsecretaría de Ingresos al remitir su respuesta propone la clasificación de reserva de la información solicitada, fundamentándose en la actualización de la hipótesis normativa señalada en el artículo 136, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, argumentando éstos que la información y documentación a la que se pretende acceder, se considera como privilegiada y de acceso restringido, toda vez que se encuentra en un sistema institucional al que tiene acceso la Dirección de Auditoría Fiscal de esta Subsecretaría de Ingresos, de conformidad con las facultades delegadas mediante el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, y es administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); por lo que esta Autoridad Hacendaria, se encuentra obligada a la reserva de la documentación, datos e información, de conformidad con el artículo 69 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, al ser este organismo público descentralizado (SAT), en correlación con el Convenio de Colaboración antes referido; así mismo dicha información forman parte de las técnicas administrativas de actuación, cuya observancia es obligatoria, con el objeto de que en forma homogénea cuenten con los elementos necesarios para ejercer las facultades de comprobación que le confieren a esta Autoridad Hacendaria vía revisión de gabinete o mediante visitas domiciliarias, por lo que de dar difusión o acceso a la información solicitada, se estaría revelando información directamente vinculada con las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también puede ser utilizados para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos, ya que podrían ser utilizados por los que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin de engañarlos y conseguir datos personales o bien, algún cobro ilícito. En ese sentido, la información requerida, puede poner en riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, así como también podrían ser utilizados para fines fraudulentos, por lo que, el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general, por lo que su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados por la propia Ley de la materia.

Así mismo, la Subsecretaría de Ingresos manifestó la prueba de daño de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; misma que a continuación se reproduce:

### **Prueba de daño:**

#### Riesgo Real

Esta Autoridad Hacendaria tiene facultades delegadas mediante el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, y es administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); con el objetivo de establecer la coordinación y colaboración administrativa para que las funciones de administración de los ingresos federales y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan en materia de Impuestos Federales Coordinados, por lo anterior se encuentra obligada a la información y datos a los que se tienen acceso, de conformidad con el Convenio citado.

En ese tenor, la publicación de los formatos antes referidos, representa un riesgo real, en virtud que dichas representaciones forman parte de las técnicas administrativas de actuación, cuya observancia es obligatoria, con el objeto de que en forma homogénea cuenten con los elementos necesarios para ejercer las facultades de comprobación que le confieren a esta Autoridad Hacendaria vía revisión de gabinete o mediante visitas domiciliarias por lo que su difusión obstruiría las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también pueden ser utilizados para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos.

#### Riesgo Demostrable

La divulgación de los formatos en mención, representan un riesgo demostrable, toda vez que son representaciones internas con las que esta autoridad ejerce sus facultades de comprobación; por otra parte, estos podrían ser utilizados por las que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin de engañarlos y conseguir datos personales, o bien, algún cobro ilícito.

Es importante destacar, que esta autoridad puede ejercer facultades de comprobación a través de visitas domiciliarias directamente en el domicilio fiscal del contribuyente, o bien, en las propias



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

instalaciones de dicha autoridad, para lo cual utiliza los diversos formatos específicos de órdenes de auditoría y actas de visita domiciliar, o de solicitud de información en revisión de gabinete; por lo que robustece señalar que, los formatos solicitados no corresponden a un trámite fiscal que deban presentar los contribuyentes, sino más bien, son utilizados en el ejercicio de las facultades de comprobación de esta Autoridad, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras.

#### Riesgo identificable

El riesgo de divulgar los formatos antes mencionados, resulta identificable, en virtud que causaría un serio perjuicio al fisco federal, toda vez que son representaciones internas utilizadas por esta autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación; así también, cabe precisar que la naturaleza de los documentos solicitados es diferente a la que tiene la legislación en materia federal, toda vez que esta última establece los derechos y obligaciones de los contribuyentes, mientras que los formatos solicitados, son documentos internos que forman parte de un marco estratégico de actuación que no busca repercutir en la esfera jurídica de los gobernados en forma aislada; así también, y como antes ya se mencionó, estos formatos pueden ser utilizados para fines fraudulentos e ilegales.

Finalmente, se reitera que los formatos solicitados es información reservada conforme al artículo 136 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas Vigente, en correlación con el artículo Vigésimo Quinto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Por todo lo antes expuesto, se puede concluir que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público, ya que al dar a conocer los formatos de órdenes de visitas domiciliarias; a los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados; se puede poner el riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de facultades de comprobación de esta autoridad, así como también, podrían ser utilizados para fines fraudulentos: por lo que el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

#### Fundamentación:

Se acredita la actualización del supuesto de clasificación manifestado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación Vigente, 105 del Código de Hacienda para el Estado de Chiapas, 136 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas Vigente, en correlación con los numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, primer párrafo, fracción I, y último párrafo, Octavo, y Vigésimo Quinto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Periodo de reserva: Que la ley local de la materia en su artículo 123 señala que la información reservada podrá permanecer con ese carácter hasta por un periodo de cinco años, por lo anterior,



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

el plazo de reserva propuesto por el período de cinco años se considera justificado al ser congruentes y proporcionales en razón de la información solicitada, para garantizar la protección a los bienes jurídicos tutelado.

IV.- Con fecha 27 de septiembre de 2024, la Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, remitió para deliberación del Comité de Transparencia la propuesta de Acuerdo de Clasificación de Información que otorga el carácter de reservada por un período de cinco años a la información referente a los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, exponiendo sobre el particular lo siguiente:

*"Con fundamento en los artículos 66, fracción II, 70 fracciones II y IV; 119, 121, 123, 126, 127, 129, fracción I; 132, y 136 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, y el cuarto, quinto, Séptimo, fracción I y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, esta Unidad de Transparencia presenta la propuesta de acuerdo de clasificación de información que otorga el carácter de reservada por un período de cinco años a la información correspondiente a los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, lo anterior con motivo de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 070121324000204, recibida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicitaron lo siguiente:*

*"solicito los formatos de auditoría de orden de visita domiciliar en materia de impuestos federales, de la secretaria de finanzas o similares."*

*Sobre el particular, el artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas dispone que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, atribuciones o funciones.*

*En este contexto, la Unidad de Transparencia, una vez analizadas las competencias de los órganos administrativos de la Secretaría de Hacienda requirió a la Subsecretaría de Ingresos la información solicitada, proponiendo el titular de ésta la clasificación de información con el carácter de reservado por el plazo de cinco años a la información relacionada con los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, por actualizarse la hipótesis normativa señalada en el artículo 136, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, toda vez que de darse difusión o acceso a la información solicitada, se estaría revelando información directamente vinculada con las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también puede ser utilizados para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos, ya que podrían ser utilizados por los que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin de engañarlos y conseguir datos personales o bien, algún cobro ilícito. En ese sentido, la información requerida, puede poner en riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, así como también podrían ser utilizados para fines fraudulentos, por lo que, el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general, por lo que su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados por la propia Ley de la materia.*



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Así mismo, la Subsecretaria de Ingresos manifestó la prueba de daño de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; misma que a continuación se reproduce:

Prueba de daño:

Riesgo Real

Esta Autoridad Hacendaria tiene facultades delegadas mediante el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, y es administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); con el objetivo de establecer la coordinación y colaboración administrativa para que las funciones de administración de los ingresos federales y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan en materia de Impuestos Federales Coordinados, por lo anterior se encuentra obligada a la información y datos a los que se tienen acceso, de conformidad con el Convenio citado.

En ese tenor, la publicación de los formatos antes referidos, representa un riesgo real, en virtud que dichas representaciones forman parte de las técnicas administrativas de actuación, cuya observancia es obligatoria, con el objeto de que en forma homogénea cuenten con los elementos necesarios para ejercer las facultades de comprobación que le confieren a esta Autoridad Hacendaria vía revisión de gabinete o mediante visitas domiciliarias por lo que su difusión obstruiría las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también pueden ser utilizados para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos.

Riesgo Demostrable

La divulgación de los formatos en mención, representan un riesgo demostrable, toda vez que son representaciones internas con las que esta autoridad ejerce sus facultades de comprobación; por otra parte, estos podrían ser utilizados por las que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin engañarlos y conseguir datos personales, o bien, algún cobro ilícito.

Es importante destacar, que esta autoridad puede ejercer facultades de comprobación a través de visitas domiciliarias directamente en el domicilio fiscal del contribuyente, o bien, en las propias instalaciones de dicha autoridad, para lo cual utiliza los diversos formatos específicos de órdenes de auditoría y actas de visita domiciliaria, o de solicitud de información en revisión de gabinete; por lo que robustece señalar que, los formatos solicitados no corresponden a un trámite fiscal que deban presentar los contribuyentes, sino más bien, son utilizados en el ejercicio de las facultades de comprobación de esta Autoridad, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras.

Riesgo identificable

El riesgo de divulgar los formatos antes mencionados, resulta identificable, en virtud que causaría un serio perjuicio al fisco federal, toda vez que son representaciones internas utilizadas por esta autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación; así también, cabe precisar que la naturaleza de los documentos solicitados es diferente a la que tiene la legislación en materia



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

*federal, toda vez que esta última establece los derechos y obligaciones de los contribuyentes, mientras que los formatos solicitados, son documentos internos que forman parte de un marco estratégico de actuación que no busca repercutir en la esfera jurídica de los gobernados en forma aislada; así también, y como antes ya se mencionó, estos formatos pueden ser utilizados para fines fraudulentos e ilegales.*

*Finalmente, se reitera que los formatos solicitados es información reservada conforme al artículo 136 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas Vigente, en correlación con el artículo Vigésimo Quinto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.*

*Por todo lo antes expuesto, se puede concluir que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público, ya que al dar a conocer los formatos de órdenes de visitas domiciliarias; a los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados; se puede poner el riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de facultades de comprobación de esta autoridad, así como también, podrían ser utilizados para fines fraudulentos: por lo que el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.*

Fundamentación:

*Se acredita la actualización del supuesto de clasificación manifestado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación Vigente, 105 del Código de Hacienda para el Estado de Chiapas, 136 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas Vigente, en correlación con los numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, primer párrafo, fracción I, y último párrafo, Octavo, y Vigésimo Quinto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.*

*Periodo de reserva: Que la ley local de la materia en su artículo 123 señala que la información reservada podrá permanecer con ese carácter hasta por un periodo de cinco años, por lo anterior, el plazo de reserva propuesto por el periodo de cinco años se considera justificado al ser congruentes y proporcionales en razón de la información solicitada, para garantizar la protección a los bienes jurídicos tutelado.*

*Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar respuesta a la Solicitud de acceso a la información multicitada, esta Unidad a mi cargo presenta para la deliberación del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, la presente propuesta de clasificación con carácter de reservado de la información."*

En atención a los antecedentes señalados y

**CONSIDERANDO**

I. Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de solicitud de acceso a la información pública, en términos de lo establecido en los artículos 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 66, fracción II; y 160, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, y el Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I, Octavo y, Vigésimo Quinto de los



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

II. Que es materia de este Órgano Colegiado pronunciarse y resolver sobre la propuesta de acuerdo de clasificación de reserva de la información por un período de cinco años, relativa a los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, información que se encuentran bajo el resguardo del órgano administrativo la Subsecretaría de Ingresos.

III. Que debe de tomarse en cuenta al resolver el presente asunto que el artículo 6o., apartado A fracciones I, II y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte conducente que se relaciona al caso, dice:

*"Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

[...]

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I.- Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza fondos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

[...]

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

[...]

*La Ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial."*

IV. Que para efectos del derecho de acceso a la información pública la Constitución Política del Estado de Chiapas establece que:

**Artículo 5o.** *Toda persona tendrá derecho:*

[...]



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

*Fracción X. A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y difundirla, por cualquier medio de expresión.  
[...]*

*Fracción XV. A acceder a la información pública gubernamental.*

V. Que en atención a la solicitud formulada, se desprende que la persona solicitante formuló la petición de información siguiente:

*"solicito los formatos de auditoría de orden de visita domiciliaria en materia de impuestos federales, de la secretaria de finanzas o similares." (Sic)*

Que al respecto, el titular del órgano administrativo Subsecretaría de Ingresos, en su respuesta propuso la clasificación de la información solicitada, realizando diversas valoraciones de los que surgen los siguientes argumentos:

Dar difusión o acceso a la información y documentación a la que se pretende acceder, se considera como privilegiada y de acceso restringido, toda vez que se encuentran en un sistema institucional al que tiene acceso la Dirección de Auditoría Fiscal de esta Subsecretaría de Ingresos, de conformidad con las facultades delegadas mediante el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, y es administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); por lo que esta Autoridad Hacendaria, se encuentra obligada a la reserva de la documentación, datos e información, de conformidad con el artículo 69 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, al ser este organismo público descentralizado (SAT), en correlación con el Convenio de Colaboración antes referido; así mismo dicha información forman parte de las técnicas administrativas de actuación, cuya observancia es obligatoria, con el objeto de que en forma homogénea cuenten con los elementos necesarios para ejercer las facultades de comprobación que le confieren a esta Autoridad Hacendaria vía revisión de gabinete o mediante visitas domiciliarias, por lo que de dar difusión o acceso a la información solicitada, se estaría revelando información directamente vinculada con las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también puede ser utilizado para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos, ya que podrían ser utilizados por los que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin de engañarlos y conseguir datos personales o bien, algún cobro ilícito. En ese sentido, la información requerida, puede poner en riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, así como también podrían ser utilizados para fines fraudulentos, por lo que, el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general, por lo que su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados por la propia Ley de la materia.

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, reconocen en la Entidad la dualidad de obligaciones sustanciales a cargo de los sujetos obligados, siendo, por un lado, otorgar el acceso de cualquier ciudadano a la información pública que tengan en su poder y, por otro, proteger la información considerada como confidencial.



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Respecto a lo anterior, el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley local o estatal reglamentaria de la materia, establecen que la información gubernamental es pública y, aunque todo ciudadano tenga derecho a obtenerla, este acceso se deberá otorgar de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley. [Énfasis añadida]

En ese sentido, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela ha manifestado que *dentro de la relación jurídica llamada garantía individual, tales derechos no son absolutos en el sentido de estar consignados irrestrictamente en la norma constitucional reguladora, pues ésta, al consagrarlos, les fija una determinada extensión. La demarcación de los derechos públicos subjetivos, por otra parte, se justifica plenamente por imperativos que establece la naturaleza misma del orden social, ya que no es posible suponer que dentro de la convivencia humana el Derecho que la organiza y encausa y autorice a todo ente gobernado desplegar ilimitadamente su actividad. La Constitución fija la extensión de los derechos públicos subjetivos. Esa fijación entraña, inherentes a la vida social, determinadas prohibiciones que se imponen a la actividad del gobernado a efecto de que, mediante el ejercicio de ésta, no se lesione una esfera particular ajena ni se afecte el interés o el derecho de la sociedad. Esas limitaciones las consignan las diversas normas constitucionales que regulan las diferentes garantías individuales.*<sup>1</sup>

Las garantías constitucionales no pueden ser ejercidas de manera irrestricta por sus titulares, sino que encuentran limitantes en los derechos de terceros y en razones de interés público. El párrafo sexto del apartado A del Artículo 6o. de la Constitución Federal refiere que la ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Por su parte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en el artículo 119, retoma dicha prerrogativa constitucional al señalar que el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o restringido en los términos expresamente dispuestos, a través de la clasificación de la información y mediante las figuras de reserva o confidencialidad, establecidos en dicha Ley, determinando su artículo 136 como información reservada aquella información cuya apertura, publicación, difusión o entrega comprometa o ponga en riesgo las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.

Por su parte la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre establece en su artículo XXVIII, lo siguiente:

*"Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático."*

De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en su artículo 32 Correlación entre Deberes y Derechos, en su numeral 2 también establece lo antes indicado.

<sup>1</sup> BURGOA ORIHUELA, Ignacio. "Las garantías individuales". 32a. edición. Editorial Porrúa. México. 2000. p. 196.



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Por lo tanto las excepciones al derecho a la información deben contemplar situaciones excluyentes normativamente previstas que facultan a la autoridad legítimamente denegar el acceso a la información existente por proteger bienes constitucionalmente relevantes y jurídicamente protegidos o derechos fundamentales vinculados a la vida privada de los titulares de la información.

Al respecto, la Ley de la materia vigente en la Entidad define a la información parcialmente clasificada de acuerdo a lo siguiente:

*Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

*XXVII. Información parcialmente clasificada: La información pública que cuente con una o varias partes que se clasifiquen como reservadas y/o confidenciales.*

Asimismo, el numeral 136 establece los casos en los que procederá la clasificación de reserva de la información, lo que para un mejor proveer se transcriben.

*Artículo 136.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya apertura, publicación, difusión o entrega:*

*[...]*

*VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.*

En este contexto, el titular del órgano administrativo, Subsecretaría de Ingresos, propuso respectivamente la clasificación de reserva de la información solicitada por el plazo de cinco años, por actualizarse la hipótesis normativa señalada en el artículo 136, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, argumentando que de darse difusión se estaría revelando información directamente vinculada con las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también puede ser utilizado para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos, ya que podrían ser utilizados por los que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin de engañarlos y conseguir datos personales o bien, algún cobro ilícito. En ese sentido, la información requerida, puede poner en riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, así como también podría ser utilizado para fines fraudulentos, por lo que, el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general, por lo que su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados por la propia Ley de la materia.

Bajo los argumentos anteriores, este órgano colegiado comparte lo sostenido por el titular de la Subsecretaría de Ingresos al determinar que la citada información debe clasificarse como información reservada en términos de la fracción VI del artículo 136 de la Ley de la materia, pues dicho elemento de información forma parte de un procedimiento en las facultades de comprobación de las obligaciones fiscales que le confieren a esta Autoridad Hacendaria vía revisión de gabinete o mediante visitas domiciliarias directamente en el domicilio fiscal del



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

contribuyente a fin de combatir de manera eficiente y oportuna, la práctica de actividades irregulares por parte de los contribuyentes, por lo que se otorgarían elementos que permitirían evadir dichas técnicas y metodologías, utilizadas en las visitas domiciliarias por lo debe considerarse como uno de los principales elementos que pueden ser utilizados para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos, ya que podrían ser utilizados por los que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin de engañarlos y conseguir datos personales o bien, algún cobro ilícito, constituyen una medida preventiva para evitar la comisión de delitos que atenten no solo contra el patrimonio del contribuyente sino también del Estado que es de interés público, cerrando así posibilidades de que se obtenga de manera ilícita información que pueda potencializar hechos delictivos.

Ahora bien, el artículo 132 de la multicitada ley local de transparencia y acceso a la información establece que los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Sobre el particular, el Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establece que podrá considerarse como información reservada, aquella que cuya difusión pueda obstruir o impedir el ejercicio de las facultades y **comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en** términos de las disposiciones normativas aplicables.

En este contexto, al determinar por disposición de ley la clasificación de reserva de la información cuya apertura, publicación, difusión o entrega comprometa o ponga en riesgo las facultades de comprobación, el derecho fundamental de acceso a la información se encuentra restringido y por ende, es responsabilidad de los sujetos obligados garantizar su custodia, protección y secreto.

Al respecto el artículo 121 de la ley multicitada ley local de transparencia, señala que los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de la clasificación de la información y en ningún caso pueden contravenirla, resultando procedente, por los fundamentos y argumentos ofrecidos por el titular de la Subsecretaría de Ingresos, la presente propuesta de clasificación de la información con el carácter de reservada, y por ende, resulta procedente restringir el acceso a la misma.

Que la parte in fine del artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, así como el Octavo de los Lineamiento Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan que la clasificación de la información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público.

Del análisis efectuado a la prueba de daño, este Comité determina que se acredita debidamente la clasificación de información propuesta, al actualizarse la hipótesis de reserva señalada en el



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

artículo 136 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, dado que el titular de la Subsecretaría de Ingresos probó el daño presente, probable y específico que causaría la difusión de los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, siendo presente o un riesgo real, en virtud que dicha representación forma parte de las técnicas administrativas de actuación, cuya observancia es obligatoria, con el objeto de que en forma homogénea cuenten con los elementos necesarios para ejercer las facultades de comprobación que le confieren a esta Autoridad Hacendaria vía revisión de gabinete o mediante visitas domiciliarias por lo que su difusión obstruiría las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes así como también puede ser utilizados para ejercer actividades fraudulentas, es decir, cualquier persona puede apersonarse con los ciudadanos haciéndose pasar por la autoridad y cometer actividades delictivas, lo cual afectaría a los ciudadanos; siendo probable o demostrable el daño, toda vez que la divulgación de los formatos en mención, son representaciones internas con las que esta autoridad ejerce sus facultades de comprobación; por otra parte, estos podrían ser utilizados por las que, con uso de engaños, se apersonan con la ciudadanía para conjurar distintos esquemas a fin engañarlos y conseguir datos personales, o bien, algún cobro ilícito. Es importante destacar, que esta autoridad puede ejercer facultades de comprobación a través de visitas domiciliarias directamente en el domicilio fiscal del contribuyente, o bien, en las propias instalaciones de dicha autoridad, para lo cual utiliza los diversos formatos específicos de órdenes de auditoría y actas de visita domiciliar, o de solicitud de información en revisión de gabinete; por lo que robustece señalar que, los formatos solicitados no corresponden a un trámite fiscal que deban presentar los contribuyentes, sino más bien, son utilizados en el ejercicio de las facultades de comprobación de esta Autoridad, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras; y específico o identificable, en virtud que causaría un serio perjuicio al fisco federal, toda vez que son representaciones internas utilizadas por esta autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación; así también, cabe precisar que la naturaleza de los documentos solicitados, son documentos internos que forman parte de un marco estratégico de actuación que no busca repercutir en la esfera jurídica de los gobernados en forma aislada; así también, y como antes ya se mencionó, estos formatos pueden ser utilizados para fines fraudulentos e ilegales.

En ese contexto; se puede concluir que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público, ya que al dar a conocer los formatos de órdenes de visitas domiciliarias; a los contribuyentes, a los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados; se puede poner en riesgo las actividades de verificación y el ejercicio de facultades de comprobación de esta autoridad, así como también, podrían ser utilizados para fines fraudulentos: por lo que el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; a fin de combatir de manera eficiente y oportuna, la práctica de actividades irregulares por parte de los contribuyentes.

En este sentido, los formatos de órdenes de visitas domiciliarias tienen el carácter de información reservada y su acceso se encuentra temporalmente restringido, advirtiendo que su manejo, custodia, transmisión y divulgación está protegido por razones de interés público, siendo obligación de este sujeto obligado la absoluta reserva de la información y su secreto, resultando procedentes los fundamentos y argumentos ofrecidos por el titular de la Subsecretaría de Ingresos



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

al proponer la clasificación con carácter de reservada a los formatos de órdenes de visitas domiciliarias en posesión de este sujeto obligado.

Que la Ley local de la materia en su artículo 123 señala que la información reservada podrá permanecer con ese carácter hasta por un período de cinco años, por lo anterior, el plazo de reserva propuesto por el período de cinco años se considera justificado al ser congruentes y proporcionales en razón de la información solicitada, siendo necesario restringir su acceso por el período de cinco años para garantizar la protección a los bienes jurídicos tutelado en el presente acuerdo de clasificación, en tanto no se dé alguno de los supuestos contemplados en el artículo 122 de la multicitada Ley.

Ahora bien, para una debida clasificación de la información deben considerarse y descartarse las excepciones a la absoluta reserva de la información. Es de resaltarse los siguientes casos:

- a) Cuando antes del cumplimiento del periodo de reserva, dejaren de existir los motivos que justificaban su clasificación;
- b) Expire el plazo de clasificación;
- c) Que se transmita entre las dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones;
- d) Sujeta a una orden de autoridad competente;
- e) Que las dependencias o entidades transmitan a un tercero contratado para la realización de un servicio, sin que pueda utilizarse para otro fin distinto, o que obtengan para evaluar las propuestas técnicas y económicas con motivo de la celebración de un contrato otorgado a través de un procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa;
- f) Excluida del carácter de reservada por disposición legal; y
- g) El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación.

De la descripción anterior, se desprende que la petición de la persona solicitante no se ubica en ninguna de las excepciones a la obligación de reserva de la información que en diversos artículos la Ley dispone, lo que viene a reiterar la imposibilidad legal para proporcionar la información solicitada.

Atendiendo los argumentos jurídicos aducidos, este Comité de Información estima procedente confirmar la clasificación de reserva propuesta por el titular de la Subsecretaría de Ingresos, por lo que la Secretaría de Hacienda no podrá difundir, distribuir, publicar o comercializar la información relacionada con los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, toda vez que se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 136, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en correlación con el Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Este Comité de Transparencia instruye a la Subsecretaría de Ingresos a adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección, custodia, resguardo y conservación de la información y documentos hoy clasificados como reservados.



## Comité de Transparencia



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Emitidos los comentarios de cada uno de los miembros del Comité de Transparencia, por unanimidad de votos y con fundamento en los preceptos aludidos y de conformidad con el artículo 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de reserva de la información requerida en la solicitud de acceso a la información con número de folio 070121324000204.

Que por lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia

### RESUELVE:

**PRIMERO.-** Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el Considerando I de esta resolución.

**SEGUNDO.-** En términos del considerando V, confirma la clasificación con carácter de reservada de la información de los formatos de órdenes de visitas domiciliarias, con motivo de la solicitud de acceso a la información pública gubernamental con número de folio 070121324000204, teniendo ese carácter por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de su clasificación, por actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 136, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en correlación con Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**TERCERO.-** Se instruye a la persona titular de la Subsecretaría de Ingresos adopte las medidas necesarias para asegurar la protección, custodia, resguardo y conservación de la información hoy clasificada como reservada.

**CUARTO.-** Hágase del conocimiento el presente acuerdo a través de la Unidad de Transparencia, a efecto de proceder a su cumplimiento y difusión en términos del artículo 166 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Así lo resolvió en sesión de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, por unanimidad de votos de sus integrantes, Mtro. Moisés Pérez Hernández, Subprocurador de Resoluciones y de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal y Presidente del Comité de Transparencia; y los miembros Lic. Odilio Pérez Vicente, Director de Política del Gasto de la Subsecretaría de Egresos y el Mtro. Gabriel Alejandro Guerra Luis, Jefe de la Unidad de Planeación; estando presente la Mtro. Roberto Isaac Velázquez Córdoba, Jefe de la Unidad de Transparencia, quien actúa en calidad de Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

Presidente

Mtro. Moisés Pérez Hernández  
Subprocurador de Resoluciones y de  
lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal.



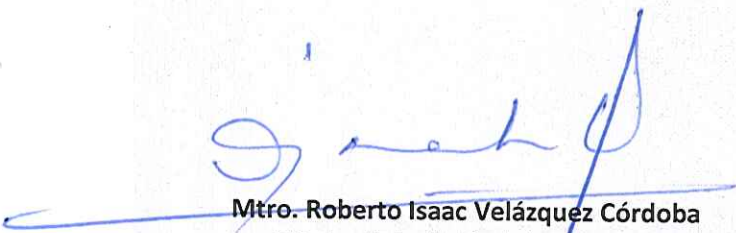
## Comité de Transparencia



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

  
**Lic. Odilio Pérez Vicente**  
Director de Política del Gasto

  
**Mtro. Gabriel Alejandro Guerra Luis**  
Jefe de la Unidad de Planeación

  
**Mtro. Roberto Isaac Velázquez Córdoba**  
Titular de la Unidad de Transparencia y  
Secretario Técnico del Comité de Transparencia



PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

15

Las presentes firmas corresponden al acuerdo número SH/CT/R/002/2024, por el que se confirma la declaración de clasificación de reserva de la información en la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 070121324000204, aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, durante la sesión de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.